

# MARCOS

# PEREZ JIMENEZ en una





# dramática encrucijada

## EL PRESO N.º 1.374 DE LA PENITENCIARIA DE SAN JUAN DE LOS MORROS (VENEZUELA)

Escortado por el fiscal federal de Florida, el ex presidente venezolano en el exilio es conducido al aeropuerto de Miami para ser trasladado a Caracas. El Gobierno de Betancourt había enviado a los EE. UU. un avión especial, que tuvo que esperar varios días en el aeropuerto de Miami, en tanto Pérez Jiménez perdía su última oportunidad para impedir la demanda de extradición.



**Texto: Armando Ruben Puente**

**A** las dos de la madrugada del día 23 de enero de 1958 una caravana de automóviles rodaba por la moderna carretera que enlaza Caracas con el aeropuerto de La Carlota. Atrás quedaba la







Pérez Jiménez en su era de esplendor, sobre estas líneas, acompañado de la esposa y protegido por dos hombres de su guardia personal, pronuncia una alocución. A la derecha, la familia del ex presidente en la actualidad: la esposa revela en su rostro las angustias vividas en los últimos tiempos.

## La extradición de un Jefe de Estado, hecho sin precedentes en el mundo

Poco antes de ser designado ministro de Defensa, fue realizada esta fotografía. Desde su nuevo puesto político daría el golpe de Estado por el cual se erigió en presidente provisional de Venezuela, «por decisión de las Fuerzas Armadas».



capital, donde sonaban disparos aislados y las ambulancias, trasladando heridos, perforaban la noche con sus agudas sirenas.

La caravana se detuvo al pie de un DC-4, bautizado con el nombre de «Vaca Sagrada», que tenía los motores en marcha. De uno de los automóviles descendió un hombre, bajo y más bien grueso, de cara redonda y gafas de montura negra, que vestía uniforme militar. Era el general Marcos Pérez Jiménez; le acompañaban su esposa y sus cuatro hijas, así como un reducido grupo de colaboradores y amigos. El avión despegó y puso rumbo hacia la República Dominicana. Así inició el ex presidente venezolano un exilio que habría de durar cinco años, cinco meses y dieciocho días y al que pondría fin una decisión del Gobierno de los Estados Unidos, que con ello sentaba un trascendental precedente en la historia del Derecho Interamericano, concediendo por vez primera la extradición de un ex jefe de Estado.

Marcos Pérez Jiménez había iniciado su vida política doce años antes, participando en otra revolución que, en octubre de 1943, depuso el Gobierno constitucional del general Isaías Medina Angarita. Aquella revolución que costaría cuatrocientas vidas —cifra trágica que iba a repetirse en enero de 1958—, estaba encabezada por los hombres de Acción Democrática y un grupo de jóvenes oficiales, entre los que figuraban

leyenda como el prototipo del dictador hispanoamericano. E igualmente eran de ese estado andino el general Isaías Medina Angarita, presidente desde 1941 a 1945 y el mayor Carlos Chalbaud.

Marcos Pérez Jiménez ingresó en la Escuela Militar de Venezuela a la edad de 17 años. Principio de su promoción, fue designado, en 1940, a la Escuela Superior de Guerra peruana, donde conoció al que luego sería general Manuel A. Odría, que desempeñaría la Presidencia en Lima, cuando él se había instalado ya en el Palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

En diciembre de 1947 hubo elecciones en las que fue designado Presidente el novellista Romulo Gallegos, candidato del Partido Acción Democrática. Cien hombres de letras de América acudieron a la ceremonia de su toma de posesión, pero su Gobierno no duró más que nueve meses. El 24 de noviembre de 1948 cayó como resultado de un nuevo golpe de Estado, sin necesidad de que se disparara un tiro. Tomó el poder una Junta Militar cuyos integrantes tenían nombres familiares en los círculos políticos y diplomáticos de Caracas: era Presidente el comandante Carlos Delgado Chalbaud, un oficial simpático y culto, educado en Francia y vinculado a las familias aristocráticas de la capital; el ministro de Defensa y alma de aquel golpe de Estado, era el ya comandante Marcos Pérez Jiménez.

El 13 de noviembre de 1950, el comandante Delgado Chalbaud murió asesinado por una banda dirigida por Rafael Simón Urbina, un revolucionario de los tiempos del tirano Gómez que —según se dijo en Caracas— obedecía órdenes del grupo «Uribante», que representaba los intereses andinos en el Gobierno. Urbina fue muerto a tiros aquel mismo día por la Policía, que le aplicó la «ley de fugas». El asesinato del presidente de la Junta quedó así envuelto en el misterio.

La Junta Militar decidió convocar elecciones para constituir una Asamblea Constituyente. Las elecciones se celebraron el 30 de noviembre de 1952. Días antes, un grupo de impacientes había lanzado la candidatura presidencial del ya coronel Marcos Pérez Jiménez. Entonces se produjo un caso que tiene pocos paralelos en la Historia de América: los partidos gubernamentales fueron derrotados por la oposición, por una diferencia de 6 a 1. El recuento de votos se suspendió. Tres días más tarde, el coronel Marcos Pérez Jiménez era elegido Presidente provisional «por decisiones de las fuerzas armadas». Quince días más tarde, se hacían públicos los resultados oficiales de las elecciones, que daban el triunfo al Gobierno. El nuevo Jefe del Estado pudo así suprimir el adjetivo a su cargo.

«Roma hubiera sido olvidada si no fuera por sus caminos y acueductos», declaró a principios de 1955 el presidente Marcos Pérez Jiménez, con palabras que resumían su ideal de Gobierno. Su presidencia pasará a la Historia por la obra material y visible, que a él le sedujo, de la Roma clásica: los embalses del Guárico, del Bocoñó y Masparro; la electrificación del Caroní; la autopista de Caracas a La Guaira; la transformación urbana operada en la capital durante su régimen; la industria petroquímica instalada cerca de Puerto Cabello; la colonia de Turén; el teleférico del Pico Bolívar; la terminación de las obras de la Ciudad Universitaria y el comienzo de la Siderurgia Nacional. Pero también pasará por haber desconocido e ignorado voluntariamente la Roma de Cicerón, de Virgilio, de Tito Livio y del Derecho Romano. Haber prestado poca atención a los problemas de la enseñanza y que, hoy, haya en la moderna Caracas de las espectaculares avenidas y rascacielos, 100.000 niños sin escuelas. Se discutirá el que haya hipotecado grandes riquezas del país otorgando, por ejemplo, en 1956, 110.000 hectáreas del lago Maracaibo y 190.000 en zonas fronterizas a concesiones petrolíferas, por sólo 975 millones de bolívares. Se le criticará por no haber iniciado la reforma de las estructuras feudales en las regiones agrícolas y ganaderas del país y de las estructuras capitalistas que controlan las riquezas minerales. Se recordará la dureza de la represión de su policía secreta y los presidios especiales de Guacina, Suicupang y Ciudad Bolívar, creados para exterminar a la oposición política.

«Nadie osará afirmar que la riqueza pe-

el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Marcos Pérez Jiménez. Fue precisamente a este último a quien correspondió, el 19 de octubre de 1945, aceptar la rendición del presidente Medina Angarita en el cuartel de caballería «Ambrosio Plaza».

A las ocho de la tarde de aquel día, en el Palacio de Miraflores, alumbrado con lámparas de petróleo, firmaban el acta de constitución de la Junta de Gobierno militares y civiles y comenzaba la etapa de gobierno de Acción Democrática, que finalizaría tres años después. Era presidente de la Junta don Romulo Betancourt, secretario general de Acción Democrática; ministro de Defensa y miembro de la misma Carlos Delgado Chalbaud, y jefe de Estado Mayor, Marcos Pérez Jiménez. Con el tiempo, uno de estos hombres, Delgado Chalbaud, moriría asesinado en circunstancias misteriosas y los otros dos se enfrentarían en una encarnizada lucha política que tendría también mucho de personal.

Marcos Pérez Jiménez había nacido el 25 de abril de 1914 en Michelena, en el montañoso Estado de Táchira, cuna de militares que han desempeñado un papel decisivo en la historia venezolana de nuestro siglo. Del Táchira era Cipriano Castro, el hombre que gobernó con mano fuerte desde 1899 a 1908; del Táchira era también Juan Vicente Gómez, que lo derrocó para manejar los destinos del país hasta 1935 como si fuera una hacienda, pasando a la



trófica se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos, va que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se pueden calificar de humanas», decía una pastoral de monseñor Rafael Arias Blanco, arzobispo de Caracas, leída en los pulpitos el 1 de mayo de 1957. Aquella pastoral provocó rozamientos entre el régimen y la jerarquía eclesástica. Desde mediados de año, a medida que se acercaba el plazo señalado por la Constitución para celebrar nuevas elecciones y nombrar nuevo Presidente, aumentó la tensión política.

Pérez Jiménez dio largas a la convocatoria electoral y estuvo a don Rafael Caldera, secretario general del partido socialcristiano «Copei» y único jefe de los tres grandes partidos políticos al que se permitía continuar viviendo en el país. Eliminó de este modo a un posible candidato. Luego anunció que, en vez de elecciones, tendría lugar un plebiscito, en el que los venezolanos debían decir si deseaban o no que continuara en el poder durante un nuevo período gubernamental de cinco años. Las manifestaciones estudiantiles de protesta fueron reprimidas y el 15 de diciembre de 1957 un 85 por ciento de la población votó a favor de la continuación de Pérez Jiménez en la presidencia, según datos oficiales.

El 11 de enero de 1958, se alzaban las guerrillas de Maracay y Los Teques. La rebelión fue sofocada, pero en su fracaso arrastró al ministro del Interior, Vallenilla Lanz y al jefe de la policía secreta, Pedro Estrada. Con ellos desapareció uno de los pilares de sustentación del régimen: la policía. El día 21 del mismo mes estalló una huelga general en todo el país, precedida de una ola de manifestaciones, panfletos y declaraciones contra el Presidente. En la madrugada del 23, el general Marcos Pérez Jiménez emprendió el camino del exilio.

Sólo dos meses permaneció en la capital de la República Dominicana, que entonces aún se llamaba Ciudad Trujillo, en homenaje a su gobernante. En marzo de 1958 se trasladó a los Estados Unidos, comprándose un chalet con vistas al mar en Miami Beach, valorado en 400.000 dólares (24 millones de pesetas). Todo hacía pensar que su permanencia allí sería tranquila. La tradición iberoamericana señalaba que, con los presidentes derrocados, debía aplicarse el refrán castellano de «a enemigo que huye, puente de plata» y, además, Pérez Jiménez había sido distinguido en 1955 por el presidente Eisenhower con la medalla de la Legión del Mérito. Había olvidado a Rómulo Betancourt, a cuyo lado había estado en 1945, cuando fue derrocado el general Medina Angarita. Betancourt fue elegido Presidente constitucional en diciembre de 1958, inaugurando un nuevo y agitado período de gobierno de Acción Democrática. A los ocho meses adoptó una decisión que nadie creyó que llegaría a tener éxito: solicitar la extradición de Marcos Pérez Jiménez, fundándose en los cargos de «conjuración criminal», tortura y asesinato de cuatro políticos de la oposición y malversación de fondos públicos.

Se inició así un proceso que iba a durar cuatro años. Cuando, al mes siguiente—septiembre de 1959—, las autoridades norteamericanas ordenaron la deportación del ex jefe del Gobierno, el procedimiento hubo de ser suspendido ante la petición formulada por Venezuela. La máquina judicial estaba ya en marcha.

## Acusación: desfalco de 780 millones de pesetas

La solicitud de extradición se fundaba en el tratado venezolano-norteamericano de 1922, suscrito con el fin de estrechar las relaciones recíprocas, facilitar la acción de la Justicia penal y reprimir los crímenes que puedan cometerse en los respectivos

territorios, a fin de evitar la impunidad que resultaría de la evasión de los delincuentes y de su asilo en una u otra nación.»

El juez George W. Whitehurst, del distrito Sur del Estado de Florida, desestimó la casi totalidad de los cargos presentados por el Gobierno venezolano, pero aceptó uno, fundado en pruebas encontradas en un maletín que Pérez Jiménez dejó abandonado en el Palacio de Miraflores, en su rápida partida, aquella madrugada del 23 de enero de 1958. Basándose en documentos que se hallaban en aquel maletín, el Gobierno de Venezuela le acusaba de desfalco a la Hacienda de 13 millones y medio de dólares (780 millones de pesetas), corrupción de funcionarios, concusión y abuso de la función pública. Basaba su reclamación en el artículo 2 del tratado de extradición, que señala que «serán entregados los individuos acusados o convictos» de una serie de delitos, entre los cuales, en el apartado 14, se especifica el de «especulador» o malversación cometida dentro de la jurisdicción de una de las partes por empleados públicos o depositarios, cuando la cantidad sustraída exceda de los 1.000 bolívares en Venezuela o de los 200 dólares en los Estados Unidos.

El 16 de junio de 1961, el juez del condado de Danc, en Miami, Florida, ordenó su detención, pero los abogados de Pérez Jiménez lograron que siguiera gozando de libertad bajo fianza. Así pudo continuar su tranquila y cómoda vida hasta el 12 de diciembre de 1962, en que fue encarcelado. Desde ese instante, muchos de los que hasta entonces habían pensado que la petición de extradición no prosperaría, comprendieron que podían estar equivocados. En Washington, Kennedy había sustituido a Eisenhower como inquilino de la Casa Blanca y, desde su llegada, se habían impuesto nuevos rumbos a la política con los «buenos vecinos» del Sur, bajo el impulso, entre otros factores, del fidelismo cubano. Se había proclamado la «Alianza para el Progreso», que implicaba la ayuda financiera y técnica norteamericana a cambio de que se introdujeran en Iberoamérica cambios sustanciales, como la reforma agraria y fiscal. Y se trataba de poner en ejecución la doctrina de golpes de fuerza o elecciones amañadas. Rómulo Betancourt se convirtió así en la más perfecta definición de la izquierda democrática que Kennedy deseaba ver gobernando en Iberoamérica y, cuando el 19 de febrero del año en curso visitó los Estados Unidos, se le hizo objeto de unos honores y elogios como jamás recibiera hasta entonces ningún otro político hispanoamericano. «Representa usted —manifestó Kennedy en esta ocasión a Betancourt— todo aquello que admiramos en un dirigente político.» Los tiempos en que Eisenhower concediera la medalla de la Legión del Mérito a Pérez Jiménez quedaban muy atrás.

A mediados del mes de mayo, los abogados del ex presidente perdieron la segunda y última batalla legal ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, definitivamente, falló que existía «causa probable» en favor de la extradición formulada por el Gobierno venezolano. Al Gobierno norteamericano correspondía en última instancia decidir si la extradición debía o no ser acordada. El 12 de agosto, el secretario de Estado, Dean Rusk, concedió la extradición. Los abogados de Pérez Jiménez recurrieron a última hora a nuevos argumentos «traídos por los cabellos», como reconocieron más tarde, pero ni la publicación demanda de paternidad presentada por una joven rubia, de 26 años, Ilona Maritz Lorenz, en favor de su hija de 17 meses, pudo modificar el curso de los acontecimientos. El 16 de agosto, una veintena de hombres, en su mayoría policías, se hacían cargo del ex presidente y le conducían a su patria en un avión comercial venezolano. El exilio había terminado.

El expediente judicial, que sentaba un precedente en materia de derecho de asilo en la jurisprudencia norteamericana, comprendía 17 volúmenes, con un total de 5.000 páginas. El caso había costado al Gobierno venezolano 14 millones de pesetas, según una prudente estimación de un funcionario de Caracas, quien dijo que Pérez Jiménez había tenido que pagar a sus abogados y a la compañía «Everett Clay Inc.» unos 50 millones de pesetas. El funcionamiento del Gobierno venezolano tenía en cuenta las sumas empleadas por el ex pre-

sidente para que la «Everett Clay Inc.» se encargara de la publicidad de su caso, pero silenciaba cuánto era lo que el Gobierno de Caracas ha tenido que destinar para que a él también algunos «lobbies» le apoyaran en la solicitud de extradición.

## La penitenciaría de San Juan de los Morros

El avión que condujo al ex presidente a su patria aterrizó en la base aérea de Palomero, situada a 112 kilómetros de Caracas. Desde allí fue trasladado en automóvil, rodeado de una fuerte escolta de policía, a la penitenciaría de San Juan de los Morros, situada a una cuarentena de kilómetros más al Sur. Aunque su llegada no había sido anunciada, los venezolanos sabían que aquella era la prisión que le había destinado Betancourt. Un grupo de partidarios le esperaba en la puerta, para vitorearle y llevarle un mensaje de aliento.

La prisión venía siendo preparada desde cuatro meses antes. En torno a tres habitaciones —dormitorio, comedor y sala de visitas— se había levantado un alto muro de hormigón, rodeado de una cerca electrificada, para aislar al ilustre detenido de los 1.254 presos que constituyen el actual censo de la penitenciaría. Para entrar en el recinto, Marcos Pérez Jiménez tuvo que atravesar ocho puertas que fueron abiertas personalmente, con otras tantas llaves, por el director de la cárcel. Cuatro hombres, que sólo pueden abandonar la penitenciaría con una orden expresa del director, iniciaron la vigilancia. El prisionero miró con indiferencia las tres habitaciones y el pequeño patio que le habían destinado y se asomó a una de las enrejadas ventanas, desde las que se ve un despejado horizonte con los típicos «morros» que dan nombre a la localidad. Allí estuvo largo rato. Probablemente pensaría, entre muchas cosas, que a esa penitenciaría había enviado él a Alberto Carnevali, dirigente de Acción Democrática, que murió por falta de la oportuna asistencia médica. La televisión y una comida criolla entreteuvieron el resto de sus horas y, luego, una novela del Oeste le permitió conciliar, tarde, el sueño.

Así terminó su primera jornada en San Juan de los Morros.

Para los juristas, sin embargo, no había hecho sino iniciarse un nuevo capítulo de la lucha legal. Los 15 magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela, que estarán encargados de juzgarlo, vieron suspendidas sus vacaciones. Mientras el ministro de Justicia preparaba el pliego de cargos, su esposa, que se dispuso en seguida a trasladarse desde Miami Beach a San Juan de los Morros, nombró provisionalmente a tres famosos abogados venezolanos que, según la ley, podrían asumir su defensa: don Rafael Naranjo Sorty, don José Ramón Berrizbeitia y el señor Morris Sicralta. Este último se ha destacado en la defensa de dos militares «perezjimenistas», uno de ellos sometido a una acción civil y, el otro, el coronel José María Castro León, encausado por haber encabezado, en 1960, el primer intento revolucionario fracasado contra el Gobierno de Betancourt. David Walter, el principal abogado norteamericano que lo defendió en Miami, volvió para comprobar si el ex presidente era tratado de acuerdo a los compromisos adquiridos por el Gobierno venezolano en virtud de la extradición: también llegó a San Juan de los Morros don Alberto Ramírez, nombrado por Pérez Jiménez para coordinar sus asuntos.

La primera demanda formulada al Tribunal Supremo tenía un carácter estrictamente personal: la esposa de Pérez Jiménez solicitaba autorización para hacerle llegar algunas prendas que había dejado en la cárcel de Miami en su rápida partida: un frasco de barbitúricos, cuatro pijamas, una bata, una maquinita y unas hojas de afeitar. No le fue permitido que se le

entregaran las hojas, por el peligroso destino que podría darles y, en cambio, se le compró una máquina de afeitar eléctrica.

La segunda petición tuvo carácter legal. Los abogados de la defensa solicitaron la libertad bajo fianza, fundándose en que ésta puede ser concedida a los acusados de delitos comunes del tipo de los que pesan sobre Pérez Jiménez. Una nueva batalla jurídica había comenzado.

Como ésta es la primera vez en la historia judicial venezolana que el Tribunal Supremo debe juzgar a un ex presidente, el caso está lleno de aspectos no definibles. Sólo uno está claro: que la pena máxima que podrá imponerse por los delitos de desfalco de 13 millones y medio de dólares, corrupción de funcionarios, concusión y abuso de la función pública, no podrá ser superior a 16 años, 8 meses y 20 días. La pena mínima sería de 5 años, 8 meses y 10 días.

El Tribunal Supremo podría también absolverlo.

## En la encrucijada

Muchos son en Caracas los que se preguntan si valía la pena dedicar tantos esfuerzos y gastar tanto dinero en un caso cuyo final se presenta aún muy oscuro. Para unos, la ejemplaridad o los efectos propagandísticos que se buscaban, hacen tiempo que fueron conseguidos: son pocos los venezolanos que dudan de que, durante el régimen de Pérez Jiménez, el manejo de los fondos públicos no estuvo sometido a estrictos controles. Para otros, entre ellos el intelectual y político Arturo Uslar Pietri —que estuvo encarcelado durante el régimen de Pérez Jiménez—, «el Gobierno intentó distraer la atención del pueblo, para que éste discuta el Gobierno que tuvo hace cinco años y se aparte de lo que le interesa o sea, el Gobierno que debe tener a partir de las próximas elecciones de diciembre».

Es evidente que aunque el juicio se presente como un simple caso de delitos comunes, encierra un carácter político. Ese carácter le viene dado por el acusado, al que sólo en un sentido amplio puede calificarse como «funcionario público», por las circunstancias y por el momento, en vísperas de elecciones. En los medios diplomáticos de Caracas no se duda de que, concediendo la extradición, el Gobierno norteamericano ha tratado de fortalecer al presidente Betancourt, que se enfrenta con serias dificultades, hasta el punto de que hay personas que piensan que no llegará a terminar su período.

La entrega de Pérez Jiménez ha significado un triunfo internacional para Venezuela, pero nadie se atreverá a predecir cuáles serán sus efectos en el orden interno. Se ha abierto una dramática encrucijada para el ex presidente venezolano.

Desde otro punto de vista, la decisión de Washington ha debido ser muy pensada, porque significó sentar un importante precedente en materia tan transcendental para Iberoamérica como el derecho de asilo. Si por un lado ha producido una reacción favorable en los medios políticos democráticos, demostrando que los Estados Unidos no están dispuestos a conceder en el futuro asilo a quienes cometen abusos en el ejercicio del Poder, por otro lado ha sentado una peligrosa jurisprudencia, ya que no hay nada más difícil que determinar dónde acaba el carácter de ciertos actos y su calificación como delitos, cuando una de las partes puede ser objeto de presiones o tener un objetivo político. Hasta ahora nadie en América se había atrevido a cruzar esa arriesgada frontera. Kennedy, el Presidente de la Alianza para el Progreso y la doctrina del no reconocimiento de los Gobiernos nacidos de golpes de fuerza, lo ha hecho. La tradición iberoamericana basada en el refrán español de «a enemigo que huye, puente de plata», ha muerto. Primero fue fusilada ante un paredón por los piquetes de barbudos guerrilleros fidelistas. Ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha escrito la lápida.

**A. R. P.**